

"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte" Ignacio Ellacuría

Editorial

2

Violencia en Mariona

Político

4

Venezuela al borde del abismo

Económico

7

La dinámica de la economía en 2003-2004

Social

10

Situación de la juventud en la coyuntura actual (II)

Regional

12

De vuelta al G-20

Reporte IDHUCA

15

Acá, la vida (de los pobres) no vale nada (II)

Violencia en Mariona

Una vez más, el penal de Mariona fue escenario de la violencia entre los reos. El violento enfrentamiento suscitado en el penal, el 18 de agosto, entre miembros de maras y presos comunes dejó, según fuentes oficiales, un saldo de 31 muertos y 28 heridos. Se trata, sin duda alguna, de una tragedia humana sobre la cual no se puede —no se debería— pasar de largo, como si tratara de algo sin importancia. Que unos seres humanos no tengan ningún reparo en arrebatar la vida a sus semejantes es algo preocupante. Que eso sea hecho con lujo de barbarie, sin piedad alguna, es aún más alarmante. Que en ello se ponga en juego la propia vida es absolutamente grave. Y es que cuando la propia vida ya no importa, todo lo demás —la dignidad de los otros, su vida— pierde significado. Ahora bien, sólo por un déficit profundo de humanidad se puede llegar a despreciar la propia vida y, en consecuencia, la de los demás.

Ciertamente, muchos de quienes están encerrados en las cárceles salvadoreñas se mueven en los límites de la inhumanidad más radical. Abundan los que se consuelan pensando que quienes bordean los límites de lo humano, no sólo merecen estar en la cárcel, sino que la sociedad está segura con ellos fuera de las calles, avenidas y plazas. En esta óptica, lo que se hace es separar el submundo carcelario —y sus habitantes— del resto de la sociedad: en el primero regiría la bestialidad y la anomalía, en la segunda la normalidad, el orden, la decencia y las buenas costumbres. De este modo, una carnicería como la del 18 de agosto en Mariona hace que mucha gente —gente normal, decente y buena— se rasgue las vestiduras y clame al cielo por lo ocurrido, pero sin que por ello se deje de creer que eso pasó en otro mundo y a otros salvadoreños con los cuales nada se tiene ver. Por supuesto, sobran los que piensan, no sólo que barbaries como esas son naturales en las cárceles, sino también que es lo mejor que puede pasar para que la sociedad se limpie de la escoria que se genera en sus márgenes.

A unos y otros no se les ocurre preguntarse por cuánta inhumanidad se produce en instituciones carcelarias como la de Mariona. Si este fuera el caso, su perspectiva sería distinta. Porque, en efecto, en penales como el mencionado, con el hacinamiento, la suciedad y los malos tratos que padecen los reos, lo que cabe esperar es su empobrecimiento espiritual y el deterioro de valores humanos fundamentales, como lo son la dignidad y el respeto a la propia integridad. La sabiduría popular no se equivoca al afirmar que las cárceles son fábricas de delincuentes. Esto es absolutamente cierto en el caso del penal de Mariona, donde se roba la poca dignidad que puedan tener quienes son reclusos en sus celdas.

También cambiaría la perspectiva si no se hiciera la separación tajante entre el submundo de la cárcel y el resto de la sociedad salvadoreña. Los niveles de violencia vigentes en El Salvador, la impunidad, la prepotencia, los abusos de poder —en fin, todas esas prácticas englobadas bajo la categoría de violencia social— no se dan principal y primariamente en los penales, sino fuera de ellos: en las calles, plazas, avenidas, centros de trabajo, escuelas y hogares. Más aún, hechos de violencia como los sucedidos en Mariona son una de las tantas expresiones de la violencia que carcome el tejido social salvadoreño de la postguerra. La violencia de “ellos” es “nuestra” propia violencia: los salvadoreños presos en Mariona son hijos de la sociedad salvadoreña; no son su fruto anómalo, sino uno de sus frutos más genuinos.

En ese sentido, lo sucedido en Mariona debe obligar a prestar atención al tipo de sociedad vigente en El Salvador. Se ha dicho que cada sociedad tiene el tipo de dirigentes políticos que se merece. Análogamente, desde un punto de vista sociológico, se podría decir que cada sociedad tiene las cárceles que se merece o, más drásticamente, que si se quiere conocer a una sociedad —sus taras, sus fobias, sus mecanismos de coerción, de exclusión o de integración— se debe examinar su sistema carcelario. Trasladado este criterio al caso salvadoreño, es claro que cárceles como la Mariona muestran, como en un espejo, lo deteriorado que está su tejido social. Es por ello que la violencia en Mariona no se agota en lo sucedido en las instalaciones del penal el 18 de agosto, sino que trasciende hacia el conjunto de la sociedad: lo sucedido en Mariona se constituye en severo juicio al tipo de sociedad —excluyente, marginadora y violenta— que se construyó a lo largo del siglo XX y que no da visos de cambiar en el siglo XXI.

Como es usual, las visiones de corto plazo se van a imponer en el abordaje de los incidentes de Mariona: se harán algunas investigaciones menores para deducir responsabilidades —obviamente, entre los reos involucrados—, se llegará a la conclusión de que el hacinamiento es un problema en las cárceles y que, por tanto, habrá que ampliar las existentes o construir otras nuevas... Pero no se abordará el doble problema de fondo: en primer lugar, la inhumanidad producida por una lógica carcelaria —en la que se plasma una lógica penal— que priva a los reos de sus derechos humanos fundamentales; y, en segundo lugar, el de una sociedad violenta y que genera violencia en los diversos ámbitos que la constituyen. Lo primero obligaría a una revisión de fondo del esquema de aplicación de justicia predominante y, en consonancia con ello, obligaría al diseño y ejecución de una política criminal acorde con los requerimientos de la democracia que se desea construir en el país. Lo segundo obligaría a abordar el problema de la violencia de un modo más integral, es decir, como un problema que atraviesa el conjunto del tejido social salvadoreño.

Venezuela al borde del abismo

Los sucesos políticos en Venezuela deberían ser motivo de profunda reflexión para todos los políticos y ciudadanos en general de América Latina. De nueva cuenta, el subcontinente parece estar al borde de nuevos episodios de inestabilidad política. La celebración del referéndum revocatorio, el pasado domingo 15 de agosto, al que se sometió el presidente Hugo Chávez, no fue suficiente para devolver la tranquilidad al país sudamericano. En este comentario se intentará una lectura de los acontecimientos políticos en Venezuela y, al mismo tiempo, se abordará la pregunta por su importancia para los demás países del continente.

La trayectoria sinuosa de Chávez

La irrupción de Hugo Chávez en la vida política de Venezuela no puede entenderse fuera del contexto particular de este país, quinto exportador mundial de petróleo y, sin embargo, marcado por unos niveles de pobreza y corrupción endémicos. Las ambiciones políticas del coronel presidente salieron a la luz pública el 3 de febrero de 1992, cuando unos 300 efectivos de la brigada paracaidista, a cuya cabeza estaba a la sazón un tal teniente coronel Hugo Chávez Frías, tomaron posiciones alrededor de la residencia del presidente Carlos Andrés Pérez, en un intento por derrocarlo.

Debido a la torpeza de los alzados en armas —dejaron de lado el control de puntos neurálgicos del país como la televisión estatal, por ejemplo—, el movimiento no llegó a un feliz término. Después de unas horas de zozobra, en la madrugada del 4 de febrero, Carlos Andrés Pérez apareció en la televisión anunciando el fracaso del intento de golpe. Poco después, el propio

Chávez tuvo que reconocer que era imposible lograr sus objetivos de hacerse con el poder.

En esa época, Venezuela pasaba por una seria crisis económica y social. Algunos años antes, precisamente en febrero de 1989, había vivido un estallido social, conocido como *el caracazo*, en protesta por la aplicación de las medidas económicas, llamadas de ajuste, dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aquellos acontecimientos significaron una profunda ruptura política en este país sudamericano, luego de más de tres décadas de regímenes democráticos ininterrumpidos. En efecto, en 1958, luego de la caída del último dictador venezolano, Marcos Pérez Jiménez, los actores políticos de ese país se pusieron de acuerdo por medio de un pacto llamado de punto fijo para: perdonar los crímenes de los militares, poner en práctica una serie de medidas sociales y económicas e introducir una real competencia para acceder a los cargos públicos de elección popular.

Gracias a ello, desde esa fecha, el COPEI —es decir, la Democracia Cristiana— y Acción Democrática se habían turnado sucesivamente en el poder. Por eso, el golpe de estado que intentó Hugo Chávez tomó por sorpresa a todo el mundo. Venezuela tenía la “buena” reputación de ser un país democrático, cuyos militares estaban totalmente subordinados al poder político de los civiles, no obstante el empobrecimiento creciente de la población y la corrupción en la que nadaban los políticos tradicionales.

El *caracazo* y la posterior intentona golpista de 1992 concluyeron con la armonía política que había reinado en ese país por más de treinta años. En esta medida,

Chávez tenía mucha razón cuando hablaba del final de una época, haciendo eco del advenimiento de una nueva República. En efecto, desde sus tiempos de joven oficial, el militar había mostrado su repudio hacia la clase política venezolana. El 17 de diciembre de 1982, junto con otros oficiales del ejército, había fundado el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), en alusión del bicentenario de Bolívar, un supuesto grupo de reflexión y de estudio del pensamiento de Simón Bolívar.

En esa época, los oficiales que discutían sobre la situación del país, decían no albergar ambiciones políticas. Chávez decía, entonces, que pretendía tan sólo “dignificar la milicia y combatir la corrupción e ineptitud de unos gobiernos civiles proclives a dilapidar los ingresos del petróleo”. Pero, lo cierto es que, diez años después, este mismo grupo de oficiales intentó un golpe de estado y, en 1998, terminó con hacerse del control político en Venezuela.

Es importante resaltar que el comandante siempre ha contado con el apoyo mayoritario de los venezolanos, en cada una de sus decisiones políticas. Por lo menos, esa es la conclusión que se ha podido sacar después de analizar todos los resultados de las elecciones a las que ha participado Chávez. Incluso en el momento del golpe de estado, dicen los analistas, el militar contaba con el apoyo de los venezolanos. Éstos ya estaban hastiados con la corrupción endémica, la incapacidad de los gobiernos de turno para resolver sus problemas más sentidos y el alejamiento de la clase política de las necesidades del pueblo.

Habiendo comprendido y azuzado las quejas de los venezolanos en contra de las estructuras de poder en su país, Chávez dedicó su tiempo para terminar de desprestigiar a una moribunda clase política. Después de ser indultado en 1994 por el gobierno de Rafael Caldera, recorrió Venezuela entera para anunciar la llegada de una

nueva era y pregonar su convicción en la necesidad de cambiar el rumbo de su país. Simón Bolívar es el héroe chavista, en cuyo nombre se busca restaurar el honor perdido y reactivar la solidaridad latinoamericana.

Temores hacia una deriva autoritaria

Chávez llegó al poder con el apoyo de una serie de movimientos sociales y partidos políticos de izquierda (entre ellos, el Partido Comunista), descontentos con los políticos tradicionales. Pero también, hay que subrayar, que se ha granjeado la enemistad de estos últimos por sus ataques reiterados en contra de una clase política acostumbrada a controlar los entresijos del poder en el país sudamericano.

En consecuencia con su percepción de la necesidad de crear una nueva Venezuela, desde su llegada al poder, Chávez ha iniciado una transformación profunda de las instituciones políticas. Su primera medida fue declarar un estado de emergencia social, con lo cual solicitó poderes especiales al Congreso para un plan de reformas económicas. Acto seguido, convocó a un referéndum para disolver el Congreso, elegir una Asamblea Constituyente y anular la Constitución de 1961, base del poder político tradicional.

Entre las medidas económicas que anunció están las que crearon mayores alarmas entre los empresarios: las relacionadas con la decisión de expropiar a los grandes latifundios baldíos, una reforma de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), entre otras. Además, en materia social, Chávez decidió que los militares empezaran a ocuparse de tareas civiles. Al respecto, a las antípodas de las certezas del régimen capitalista en vigor en Venezuela, declaró que su lema consiste en: “tanto Estado como sea necesario, tanto Mercado como sea posible”.

Amparados en los hechos anteriores, la oposición denunció desde un principio las

derivas autoritarias de Chávez. Sus lazos con el gobierno de Fidel Castro, sus acercamientos con líderes políticos antes denigrados por otros gobiernos occidentales, como el coronel Kadhafi de Libia, presentan a sus ojos elementos probatorios de sus acusaciones. Incluso se ha intentado ligar a Chávez con la organización terrorista de Osama Bin Laden, Al Qaeda. En el fondo, las radicales transformaciones políticas que ha experimentado Venezuela desde la llegada al poder del militar han derivado en un control total y, sin duda, peligroso, del poder político. El fallido golpe de Estado organizado por los empresarios y algunos militares hostiles a Chávez se quería justificar con la idea de evitar la instauración de una dictadura en Venezuela.

América Latina en el espejo de Venezuela

Si bien la concentración de poder a la que ha llegado Chávez puede ser preocupante para los opositores, éstos, sin embargo, no han mostrado un comportamiento más democrático a lo largo de la lucha en su contra. En algunas ocasiones han dejado la sensación de estar cegados por sus ambiciones de poder y por su odio inveterado en contra de Chávez. Los últimos acontecimientos en torno al referéndum revocatorio son una señal inequívoca de lo anterior.

No obstante la supervisión internacional estrecha del proceso electoral, los opositores siguen negando la legalidad del veredicto popular. Algunos se atreven, incluso, de una manera absurda, a acusar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al Centro Carter de defender los intereses de Chávez. El precio del petróleo sería supuestamente la razón por la cual se habría avalado el fraude cometido en su contra. En realidad, estos políticos y empresarios se niegan a aceptar una realidad

que escapa de sus manos.

En el fondo, los sucesos políticos en Venezuela y el apoyo reiterado de una mayoría de ciudadanos a Chávez esconden una realidad más profunda que tanto la oposición como sus mentores internacionales en los Estados Unidos han querido ignorar. Una realidad caracterizada por la corrupción, una democracia elitista y unos líderes políticos más preocupados por satisfacer las demandas de los organismos internacionales que por escuchar las demandas de sus pueblos. Debido a esta realidad, en Venezuela, uno de los países más afortunados del mundo en cuanto a recursos naturales se refiere, la mayoría de la población a duras penas sobrevive en la pobreza y la indigencia.

Hace falta tomar en cuenta la alianza existente entre las élites económicas venezolanas y las grandes empresas internacionales. De lo contrario, difícilmente se podrá llegar a una explicación satisfactoria a la pregunta de por qué el discurso incendiario de Chávez sigue teniendo tanto eco en su país. Quienes lo denigran por su discurso populista y sus reiteradas denuncias en contra del capitalismo, olvidan que la supuesta normalidad económica que imperó por más de tres décadas nunca resolvió las dificultades económicas y sociales de la mayoría de los venezolanos.

Es necesario que los líderes políticos latinoamericanos tomen en consideración lo que está sucediendo en Venezuela. Las mismas razones que subyacen la crisis política que vive esa nación se repiten en cada uno de los países del continente. Se habla de democracia, mientras que tan sólo un pequeño grupo de empresarios, representantes locales de los intereses de las transnacionales, se aprovechan de los, muchas veces erráticos, avances económicos.

La dinámica de la economía en 2003-2004

El contexto del crecimiento económico salvadoreño se ha debatido en los últimos años entre el crecimiento mínimo y la amenaza cada vez mayor del estancamiento de los sectores productivos. El Salvador creció apenas un 2% en 2003, es decir, 0.1% menos que la tasa de crecimiento de la población (2.1%) para ese mismo año, por lo cual el producto por habitante se estancó por cuarto año consecutivo. 2003 fue, pues, el año del peor rendimiento económico desde 1997, salvo 2001, durante el cual se sufrió el impacto de los terremotos y se inició el proceso de dolarización.

Dos años después de la reconstrucción desde los desastres de 2001, la economía salvadoreña parece postrada en la inercia de un crecimiento incierto, sin motores productivos endógenos. Se busca la respuesta en los tratados de libre comercio, como el que se pretende rubricar con Estados Unidos, pero el potencial productivo y competitivo de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas es nulo. Por otro lado, se busca mantener la demanda interna supeditándose al dinamismo de las remesas.

Además, las finanzas públicas no sólo son frágiles, sino que se encuentran en peligro de volverse insostenibles, dada la presión para estimular la demanda y, aunque las perspectivas de crecimiento global parezcan positivas para el 2004-2005, factores tales como el alza en los precios del petróleo por el conflicto de Medio Oriente y los déficits en las finanzas públicas de Estados Unidos, entre otros, podrían arriesgar la reactivación económica del país.

Los problemas de siempre

Según el más reciente *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2003-2004* de la Comisión Económica para Amé-

rica Latina (CEPAL), en el ámbito de las finanzas públicas hay dos factores que merecen destacarse: en primer lugar, el gobierno del presidente Flores se concentró en ajustar las finanzas públicas ante el aumento del déficit fiscal y del preocupante aumento del endeudamiento ocurrido en los dos años previos, a lo cual se sumaron las presiones derivadas del pago de pensiones de empleados públicos y del apoyo financiero que se le brindó al sector cafetalero en el contexto de la crisis de la caída de los precios del café. De esta manera, un logro que se obtuvo con esta política económica fue que el déficit del sector público no financiero (SPNF) se redujo de 3.3% a 1.3% como proporción del PIB, lo cual es positivo.

Del otro lado de la moneda, la deuda pública externa continuó aumentando, lo cual hace apagar los resabios positivos anteriores, puesto que, aunque el ámbito macroeconómico mantuvo una relativa estabilidad en indicadores tales como la inflación (2.1%, es decir, se mantiene bajo niveles reducidos y aceptables) y las tasas de interés pasivas se mantuvieron bajas (uno de los subproductos de un proceso de dolarización finiquitado y de estar anclado a la política monetaria de Estados Unidos que trata de estar en línea con las tasas internacionales), otros indicadores todavía se mantienen en alerta roja casi persistentemente. Es preocupante, por ejemplo, que el saldo deficitario de la cuenta corriente haya aumentado (la CEPAL identifica lo anterior como la causa principal del desequilibrio de la balanza comercial) y que lo único que salva este desequilibrio no sea un factor endógeno sino uno exógeno: las remesas familiares. En suma, este último rubro ha llegado a alcanzar 2,105 millones de dólares y una importan-

cia tan grande en la economía salvadoreña, al grado que financió el déficit comercial casi en su totalidad.

Durante 2003, el gobierno colocó bonos en el mercado internacional, que alcanzaron los 348 millones de dólares. Esta acción contribuyó a paliar en un grado significativo la caída de la inversión extranjera.

En torno a la preocupación fiscal, existe otro factor que será de importancia para el crecimiento en 2004: en el primer semestre de este año la Asamblea Legislativa no había aprobado el Presupuesto General de la Nación, debido a las disputas partidarias en temas como la transferencias presupuestaria a los gobiernos municipales. Este tipo de problemas se traducen en consecuencias graves para el desarrollo productivo del país, pues producen desconfianza y limitan el desarrollo de la inversión en condiciones de estabilidad.

El déficit del gobierno central mejoró levemente con respecto al año 2002, pues se redujo en un 0.8% y alcanzó el 2.3%. La estrategia seguida por el gobierno se podría resumir en medidas de fiscalización y vigilancia más severas para lograr una mayor recaudación tributaria. En este sentido, durante 2003 se buscó eliminar las exenciones del IVA y de la renta y llevar a cabo políticas de fortalecimiento de la administración tributaria (por medio de la ley de simplificación aduanera y las modificaciones a la legislación de infracciones aduaneras, por ejemplo), con lo cual se logró aumentar la recaudación tributaria en 8.8%.

En suma, todas estas políticas de austeridad para extraer lo más que se pueda de los recursos fiscales, han traído consecuencias positivas, pero no por eso ha dejado de ocultar las repercusiones negativas en la política económica durante 2003.

El Salvador no tiene muchas opciones: o mantiene su política fiscal restrictiva para no llegar a saldos aún más negativos, con el peligro de no satisfacer las presiones de los organismos financieros internacionales

que demandan limpieza en las finanzas públicas, o se arriesga a quedarse sin margen de maniobra alguno. Después de todo la era posterior a la dolarización ha traído una realidad: la política monetaria es casi inexistente y sólo se tiene una forma de manejar los problemas: la política fiscal.

El dilema que ahora persiste es que, con el estancamiento económico actual, el país demanda cada vez más una política fiscal expansiva, que haga despertar a los sectores productivos de su aletargamiento.

Según puede derivarse del análisis de las ramas de producción, otra vez se repitió la historia de 2003. Según el Banco Central de Reserva (BCR), el sector agropecuario retrocedió en un 0.6%, debido en parte al escaso dinamismo de los granos básicos y de la lenta recuperación de los precios internacionales del café y del azúcar. Por encima del promedio del PIB se elevaron la electricidad, gas, agua (4.6%) minería (4.0%), construcción, (3.5%), industria manufacturera (2.8%), sector financiero (2.8%) el transporte (3.1%).

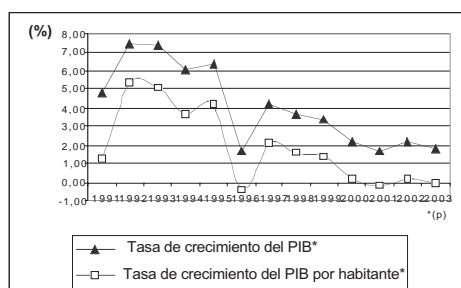
Lo que preocupa es que, precisamente, no hay dinamismo productivo donde debería de haberlo: el sector agrícola y el sector manufacturero, que todavía no encabezan el crecimiento del PIB. Esto, por supuesto, tiene consecuencias en el empleo y en los salarios. Es de recordar que en el mercado de trabajo, las tasas de ocupación se ha mantenido sin cambios significativos en años recientes. Para 2003, todavía se mantiene en 41%. Ahora bien, las tasas de desocupación se encuentran en franco crecimiento (del 6.2% que registraron en 2002, pasaron a 6.9% en 2003) y lo más grave es que, como consecuencia del poco dinamismo económico, en el sector rural es mucho más alta (8.2%)

En conclusión, los problemas de 2003, parecen ser los de siempre: la preponderancia de políticas económicas de estabilización en conformidad con las exigencias de los organismos internacionales, la supedi-

tación del desarrollo a factores sobre los cuales no se tiene mayor control, como la firma de tratados de libre comercio, o la dependencia cada vez mayor de las remesas fami-

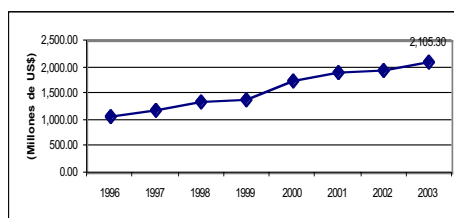
liares, que son, a su vez, señal de la mala política productiva y laboral del gobierno. El motor económico sigue sin encenderse.

Gráfico 1: Tasas de crecimiento del PIB real y del PIB real por habitante



Fuente: Banco Central de Reserva

Gráfico No. 2: Ingresos mensuales en concepto de remesas familiares



Fuente: Banco Central de Reserva

Gráfico No. 3: Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), por sector productivo (Base 1990 = 100) Promedio móvil: 12 meses (mayo)

Tabla No. 1- Empleo

Empleo	Tasas Anuales Medias								
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003*
Tasa de actividad (1)	52.4	51.3	50.9	53.5	52.6	52.2	53.3	51.2	53.4
Tasa de desempleo abierto (2)	7.6	7.7	8	7.5	7	6.7	7	6.2	6.9
Tasa de subempleo visible (3)	nd.	nd.	nd.	3.2	3.5	3.4	3.4	4.1	4.5

Fuente: Banco Central de Reserva. 1/ Cifras preliminares revisadas a marzo/04,

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales (*): Cifras preliminares

- 1: Población económicamente activa como porcentaje de la población en exportaciones de bienes y servicios de la balanza de pagos
- 2: Desempleados como porcentaje de la población económicamente activa, total nacional.
- 3: Subempleados como porcentaje de la población económicamente activa, total urbano.

Situación de la juventud en la coyuntura actual (II)

Desde una perspectiva socioeconómica, es evidente que la vulnerabilidad de los jóvenes salvadoreño va aparejada a la carencia de una política integral de Estado enfocada a ese sector. Obviamente, lo anterior no niega los esfuerzos que se hacen desde el Estado para tales fines, pero señala la insuficiencia y desvinculación de los mismos. Uno de los síntomas de lo anterior es la respuesta de la juventud en la política: ante una clase política que se dedica a perseguir sus intereses particulares, los jóvenes, en su mayoría, responden con desinterés, escasa participación y hasta repugnancia. No es de extrañar, como ya se ha dicho en el apartado anterior, que en tiempos electorales la juventud destaque más por su pasividad —como cantera de potenciales votos— que por su real participación —la vía activa— en las discusiones y toma de decisiones políticas.

Juventud y política

El acontecimiento político de mayor relevancia para la población juvenil —y para la sociedad en su conjunto— en la actual coyuntura política han sido las recientes elecciones presidenciales del 21 de marzo. Durante la campaña electoral que llevó a Antonio Saca al cuarto periodo presidencial del partido ARENA, todos los partidos políticos y sus candidatos ofrecieron una serie de proyectos a los diferentes sectores nacionales. Uno de los sectores a los que se dirigieron las propuestas electorales fue precisamente la juventud, tomando en cuenta que casi veinte de cada cien salvadoreños aptos para votar eran jóvenes —en su mayoría, indecisos—

Con toda razón, las propuestas de los programas de gobierno de los partidos y sus candidatos prometían a la juventud, desde mayores oportunidades educativas, hasta espacios de deporte y esparcimiento en sus municipios, pueblos, cantones y colonias. En definitiva, la juventud fue un sector de suma importancia en términos electorales. La ofer-

ta del partido ARENA, por ser el partido ganador, es la que más interesa en estas líneas: de su conocimiento pueden establecerse canales de vigilancia ciudadana que agilicen la ejecución de proyectos concretos con una visión a largo plazo. Además, hay que decir que mediante la utilización de la figura de un candidato exitoso y trabajador —ideal que Saca ofreció a cualquier salvadoreño joven—, fue el partido oficial el que más sedujo el voto indeciso de la juventud.

La oferta del partido oficial a la juventud comprende las grandes líneas del plan “País Joven”, que según sus gestores coordina esfuerzos interinstitucionales que desarrollan programas en las áreas de arte y cultura, deporte y recreación, voluntariado, prevención en salud y educación de la sexualidad, prevención de adicciones, prevención de conflictos y de la violencia, programas alternativos en educación, formación profesional, inserción laboral y bases empresariales, educación para la vida, fortalecimiento de la autoestima y valores, es decir una amplia gama de ámbitos.

La oferta ha sido, pues, tentadora. En pocas palabras, Saca ha ofrecido a los jóvenes la llave del éxito y la seguridad para alcanzarlo. El espíritu de su programa emblema “País seguro” es la consecución de un entorno social que permita a la juventud desplegar todas sus potencialidades, sin el temor de ser asaltados, violados o asesinados por los pandilleros y delincuentes comunes en las calles, plazas y espacios públicos del país. Lo anterior se complementaría con la ejecución de la serie de programas arriba señalados. Es decir, el nuevo presidente ha ofrecido a la sociedad salvadoreña —y dentro de ella especialmente a la juventud— las oportunidades de las que ha carecido mientras sus antecesores han conducido los destinos del país.

Lo que Flores dejó en herencia a la juventud no va más allá de los ladrillos y el cemento de las escuelas y demás espacios físicos erigidos durante su gestión. Pero le

faltó uno de los valores y de las prácticas más importantes para la construcción de la democracia a la cual dice haber contribuido: el diálogo y el consenso. Como es sabido, los últimos meses de su gestión estuvieron signados por la discordia. El Poder Ejecutivo terminó reñido con el Judicial, la oposición en la Asamblea Legislativa y la mayoría de municipalidades de la República. El punto más crítico de la falta de entendimientos fue, sin duda, el atraso en la aprobación del Presupuesto General de la Nación, que habría impedido que algunos proyectos se ejecutaran en los tiempos establecidos y algunas inversiones se perdieran. Irónicamente, en la página de Internet del partido oficial se lee que Francisco Flores será recordado por los salvadoreños como “el presidente de la unidad nacional”.

Lo que vino después de las elecciones, mientras todavía Francisco Flores se aferraba al poder, fue un tenso ambiente sociopolítico que dijo mucho del estilo autoritario de gobernar del entonces presidente: a espaldas de la población. De hecho, una de las últimas iniciativas de Flores en materia de política internacional, el envío de tropas salvadoreñas a Irak, fue cuestionada no sólo por la oposición política, sino también por amplios sectores nacionales que leían en esa medida un claro vasallaje ante el gobierno de Estados Unidos, en una especie de intercambio: soldados a Irak por una ampliación del TPS para los inmigrantes salvadoreños en los Estados Unidos y el cierre del TLC entre ese país y la región centroamericana. Resultaría interesante indagar sobre el apoyo de la juventud salvadoreña a esas medidas del gobierno, tarea a la que no se han dado los acuciosos centros de medición de la opinión pública.

La propuesta de una segunda Ley Antimaras y la continuidad del Plan Mano Dura también dieron una idea de la insistencia de Flores en sacarle provecho a una estrategia que aseguró a su partido un nuevo periodo en la silla presidencial. Flores se despidió reñido con varios sectores nacionales, pero cedió su poder a otro arenero, cosa que los jefes areneros veían con poca claridad luego de los resultados de los comicios legislativos y municipales del año 2003. An-

tonio Saca, pese al aire de renovación que ha caracterizado sus primeros meses de gobierno, parece continuar en la misma línea que su antecesor, al menos en lo referente al combate de la delincuencia juvenil. Y es que, quíerese o no, la “súper mano dura” no es más que la reedición del nefasto plan policial de Flores y sus asesores de imagen. Como quiera que esto sea, la posición del partido oficial y del Poder Ejecutivo ante la violencia generada por las pandillas y otros grupos juveniles minoritarios pone como tema de discusión otro fenómeno de exclusión social: la marginalidad juvenil.

Reducir las maras o pandillas a células violentas y criminales, sin más, es una visión miope de ese fenómeno al desligarlo, intencionalmente, del tejido social del cual son expresión. Dicho de otro modo, los planes “mano dura”, “escoba” y “puño de hierro” —por mencionar los más célebres—, y las leyes antimaras tienen más de represión estatal que de atención integral a un sector que de por sí ya ha sido marginado de la sociedad, pese a ser un fiel reflejo de ella. La etiqueta de “marginado” llega al pandillero hasta su lugar de reclusión —en caso de que un juez haya encontrado suficientes elementos probatorios que lo incriminen en un delito—, sitio en el que, lejos de reinsertarse a la sociedad, es condenado a la marginalidad e inhumanidad más duras.

La última matanza registrada en el penal de Mariona —que se cobrara la vida de 32 presidiarios, seis de los cuales esperaban una resolución del juez— dice mucho de los niveles de inhumanidad reinante en el sistema penitenciario salvadoreño, destino de cientos de jóvenes, en su mayoría marginados y provenientes de los estratos más pobres de la sociedad. Terminar un análisis de la situación de la juventud en la actual coyuntura subrayando la marginalidad juvenil no ha sido en vano: lejos de la parafernalia oficial de los tiempos eleccionarios, ha permitido insistir en lo que se oculta en los discursos de los políticos, quienes irónicamente se consideran la encarnación de los más nobles valores democráticos.

De vuelta al G-20

La presente semana comenzó con una noticia interesante en el plano regional: el gobierno guatemalteco ha decidido regresar al Grupo de los Veinte (G-20), integrado por países subdesarrollados que buscan actuar en bloque en las negociaciones internacionales de libre comercio. La decisión es un gesto de autodeterminación del país centroamericano ante un tema espinoso frente a los EEUU.

Un cable de la agencia noticiosa AP reproduce declaraciones del canciller guatemalteco Jorge Briz Abullarach, dadas en la ciudad de Brasilia, donde el funcionario anunció la decisión de su gobierno de "reincorporar a su país al G-20 sin consultar con Estados Unidos". En palabras del jefe de la diplomacia de la nación vecina, la decisión se dio a resultas de la visita de su colega brasileño Celso Amorim, con el fin de "realizar una alianza estratégica con países con los que estamos pensando del mismo modo".

Briz Abullarach aseguró que la decisión se tomó sin llevar a cabo "ninguna consulta" con Washington. También reconoció que "el G-20 nos presentará oportunidades, y tal vez inconvenientes. Pero tenemos allí buenos amigos y el grupo tiene una gran importancia. La reincorporación fue una decisión presidencial". ¿Cuáles son los inconvenientes del grupo? ¿Cuáles son las oportunidades de las que habla el canciller guatemalteco?

En las siguientes líneas se plantea que la pertenencia al G-20 es un tema delicado en las relaciones con los EEUU, pero ello no implica el fin del mundo para el país centroamericano. Tampoco implica ponerse del bando de los enemigos de Washington, sino ensayar un nuevo tipo de relaciones internacionales.

Centroamérica en el G-20: los inconvenientes

Recuérdese que la defección guatemalteca se dio en el marco de la ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebradas el año pasado en Cancún, México. En dicha ocasión, se discutió el problema de los subsidios agrícolas. La posición del grupo consistió en exigirle a las naciones desarrolladas que suspendieran los subsidios a sus agricultores, para así competir en similitud de condiciones. Las discrepancias entre el bloque constituido por EEUU y la Unión Europea (UE) y los países tercermundistas agrupados en el G-20 no sólo afloraron, sino que la reunión se convirtió en un fracaso, pues no se dieron acuerdos de ningún tipo.

El enfrentamiento entre el G-20 tuvo sus costos en el seno de la agrupación, liderada por Brasil y la India. Pronto se puso de manifiesto el poder de disuasión de los EEUU, particularmente hacia los países del Istmo y de Sudamérica, como Colombia.

El viaje a Centroamérica del jefe del comercio exterior estadounidense, Robert Zoellick, buscó poner las cosas en claro. Si países como Guatemala, Costa Rica y El Salvador pretendían entrar al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EEUU y Centroamérica (conocido por las siglas inglesas CAFTA), debían salir primero del G-20. Costa Rica mantuvo su postura, mientras que El Salvador no precisó de las advertencias de Zoellick para alejarse del grupo. En el caso guatemalteco, el gobierno del entonces presidente Portillo declaró inicialmente que se mantendría en el G-20. Sin embargo, el cambio de postura se consumó en poco tiempo.

El cambio de gobierno en Guatemala implicó una verdadera ruptura en muchas

de las políticas de gobierno. A propios y extraños les deja sorprendido el hecho de que el gobierno del presidente Óscar Berger ha tomado el toro por los cuernos en una serie de temas complicados: el combate a la corrupción, la reducción de las fuerzas armadas y el seguimiento de los acuerdos de paz. Sorprende, por el hecho de que Berger es un empresario y su partido, de derecha. Normalmente, lo que se ha visto en Guatemala y otros países es que se concibe el gobierno como un instrumento para hacer florecer los negocios particulares.

Sin embargo, el viraje dado desde su gobierno hace ver que hay un sector empresarial con ideas distintas a las de quienes quieren hacer dinero a la sombra del Estado. Se ha comprendido que la empresa privada no está sola en la sociedad y que difícilmente puede sobrevivir mientras haya descontento social. El desarrollo económico es un objetivo loable, pero no puede ir divorciado de la justicia social, expresada en condiciones de vida dignas para las mayorías.

Por consiguiente, la decisión anunciada por el canciller guatemalteco se corresponde con esta manera de pensar. Volver al G-20 podría implicar fricciones con los EEUU en lo inmediato, pero es necesario tener visión de país. Al fortalecer el grupo, lo que se hace es tratar de asegurar el futuro de Guatemala. Las consecuencias de firmar apresuradamente acuerdos de libre comercio quizás no se hagan ver en el plazo inmediato, pero sí pueden significar daños irreparables para la economía en el futuro.

El inmediatismo de algunos gobernantes, consistente en sólo tener miras para el período en el que dura su mandato, es una práctica nefasta. Ciertos gobernantes aprovechan ese tiempo para enriquecerse a sí mismos, con la complicidad de los sectores de poder político y económico a los que representan. Por tanto, no les interesa las

repercusiones en el largo plazo que una decisión pueda tener, si será el próximo gobierno (y el pueblo) quien tendrá que lidiar con sus consecuencias.

El G-20 no es un grupo contrario a los EEUU

Los países que abandonaron el G-20 lo hicieron para no perjudicar sus relaciones con los EEUU. Sin embargo, estos países tomaron una decisión demasiado apresurada. El grupo no es antinorteamericano. No se están agitando banderas antiimperialistas, o algo parecido.

La relación con los Estados Unidos es importante para el G-20. Ello se desprende de las acciones de dos de sus principales miembros: Brasil y Venezuela, países que han estrechado contactos con la nación norteamericana en los últimos días. Una nota periodística de *The Wall Street Journal* afirmaba que algunas compañías petroleras de EEUU estaban listas para invertir en Venezuela, mientras que el mandatario brasileño Luiz Inazio "Lula" da Silva declaró que la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que encabezan los EEUU, no se contradice con el fortalecimiento del Mercosur.

En declaraciones al rotativo chileno *El Mercurio*, el presidente brasileño afirmó que su país quiere "relaciones fuertes con nuestros vecinos, pero también con Estados Unidos, uno de nuestros principales socios comerciales." En otra entrevista, reproducida en el periódico ruso *Pravda*, Lula explicó que es necesario que el ALCA respete las diferencias económicas entre los países de las Américas. "Por esa razón, hace muchos años hemos estado discutiendo el hecho de que, en el debate del ALCA, no se tiene nada semejante a lo que ocurrió en la construcción de la Unión Europea, donde los países ricos ayudaron al desarrollo de los pobres, como España, Grecia y Portugal", añadió.

El G-20 es, pues, un grupo que busca discutir los problemas en común que tienen los países pobres y defender posiciones conjuntas ante las naciones poderosas. El canciller Amorim declaró, durante la reunión ministerial del G-90, celebrada en Mauricio el 12 de julio recién pasado, que lo que ocurrió en la reunión de la OMC en Cancún no fue un fracaso, sino que llevó a que los países ricos comenzaran a flexibilizar sus posturas.

“Desde el atasco de las negociaciones en Cancún, se han dado signos alentadores”, declaró el jefe de la diplomacia brasileña. “La Unión Europea ha manifestado su disposición de eliminar finalmente los subsidios a la exportación. (...) Esperamos que se alcance un acuerdo que defina un plazo razonable para concluir con todas las formas de subsidios a las exportaciones, y esto deberá incluir a los instrumentos que los EEUU y otros países emplean y que tienen efectos similares en la competencia de las exportaciones.”

Lo que se pretende no es prescindir de los EEUU, sino replantear las relaciones comerciales con ese país, basándose en el respeto mutuo. EEUU tiene un lugar indiscutible en el comercio mundial. El proceso de globalización no se puede concebir sin su concurso. EEUU es un socio comercial de importancia para cualquier país.

Se trata de tomar una postura realista, pero el realismo no implica la sumisión a ningún poder. Una lectura realista del contexto mundial implica partir de las realidades propias y no estar en función de intereses ajenos. Así como es muy difícil prescindir de los EEUU —sobre todo, en el contexto centroamericano, en el cual la emi-

gración a ese país es un tema que está a la orden del día—, también resulta poco realista marginar a los países pobres de un mundo que se encuentra cada vez más integrado, al menos en el plano comercial y de las comunicaciones.

Un proyecto como el G-20 no busca invertir las relaciones basadas en la desigualdad entre los países pobres y los ricos. De nada sirve perpetuar las injusticias cambiándolas de signo.

Conclusiones

Una visión de país a largo plazo debe tomar en cuenta el tema del comercio mundial. Por ello, las decisiones que se toman en temas como el ALCA o los TLC deben ir más allá de los factores coyunturales o de la inmediatez de cualquier tipo.

Berger ha enmendado la decisión errónea del gobierno anterior. Al salirse del G-20, el ex mandatario Alfonso Portillo quería congraciarse con los EEUU, cuyo gobierno le había retirado al gobierno centroamericano la certificación que aprueba el desempeño en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Con anterioridad, le había ofrecido a los EEUU la entrada irrestricta de sus importaciones. Esto ejemplifica cómo podía perjudicarse la economía guatemalteca para obtener un beneficio inmediato.

Ojalá otros países sigan el ejemplo de Guatemala. El fortalecimiento de instancias como el G-20, el Mercosur y otras, son pasos importantes hacia la integración de los países latinoamericanos. El futuro de cada uno de esos países, ya sean poderosos económicamente como Brasil, o tengan economías menos robustas, no puede verse aislado del resto.

Acá, la vida (de los pobres) no vale nada (II)

Ante el sufrimiento de la población ocasionado por graves hechos de violencia, el Plan "País Seguro" de Antonio Saca fue una red efectiva para recolectar los votos de los pobres. Con éste, ofreció "realizar todas las acciones conducentes a procurar a sus ciudadanos, la protección, conservación y defensa de los derechos fundamentales, particularmente, la vida, la integridad física, moral y la libertad, permanentemente amenazados por la criminalidad". Sin duda, el planteamiento convenció a mucha gente; pero la realidad nacional nos obliga hoy a preguntarnos: ¿país seguro para quién? Porque en El Salvador, el hecho de ser pobre, pandillero, mujer, niña o niño tiene como consecuencia un "atención de segunda clase"; "atención" que tiene, como una de sus manifestaciones más evidentes la inseguridad y la falta de protección para estas personas.

Este trato de "segunda" se evidenció con los hechos ocurridos la semana pasada en el Centro Penal "La Esperanza", el cual se convirtió en el escenario de una de las peores masacres carcelarias durante los últimos quince años, dejando un saldo de treinta y un reos muertos y más de una veintena de heridos.

Independientemente de las razones que dieron lugar a la trifulca, la revuelta comenzó cuando miembros de la Mara dieciocho lanzaron una granada de fabricación artesanal a otro grupo de los reos mal llamados "civiles", como si quienes pertenecen a las pandillas constituyeran una categoría distinta. Tras la explosión vino la muerte y la confusión. En ese momento, la única participación digna de las autoridades del penal fue realizar disparos al aire para "tratar de calmar" los ánimos de los reclusos; intervención tímida si se quiere, pero prudente, tomando en cuenta la obvia incapacidad de los agentes frente a las dimensiones del problema. Después de seis horas, se procedió a retirar los cuerpos sin vida de los reclusos y atender a los heridos, mientras sus familiares —madres, esposas e hijos— sufrían colapsos nerviosos al no recibir información sobre sus seres queridos.

Aun cuando las autoridades se empeñen en buscar "motivaciones personales" para explicar la tragedia, desligándose de su respon-

sabilidad directa al no tratarse de una riña contra las autoridades del penal, esta desgracia desatopó un problema que va más allá del carácter "personal" de los reos. Pareciera que las autoridades quieren ocultar la raíz de estos acontecimientos: el irrespeto de los derechos humanos y el incumplimiento de las leyes.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) advirtió sobre esta situación a mediados del año pasado, expresando, entre otras cosas, lo siguiente: "si se tomara un interno de nuestro sistema penitenciario, casi con seguridad se descubriría que reside en una celda de características infrahumanas, hacinada de personas, sucia y quizá sin contar con una cama; en caso de estar 'aislado', permanecería en una celda en extremo reducida, sin los mínimos espacios para una sola persona, pero en ocasiones compartiéndola con otros. Ese interno no tiene acceso a servicios de salud adecuados, ni a trabajo o educación o a condiciones de higiene dignas; el interno, además, es víctima de las disfunciones y burocracias de la justicia; su seguridad está gravemente afectada por la violencia de la cárcel y, por si fuese poco, ha sido estigmatizado por una sociedad que difícilmente le recibirá de nuevo en igualdad de oportunidades para subsistir."

De lo anterior se infiere la existencia de graves problemas estructurales e institucionales en nuestro sistema penitenciario diseñado, por cierto, sólo para albergar pobres. En las cárceles del país constantemente se violan diversos derechos: a la vida, a la integridad física, a ser tratado digna y humanamente, entre los más elementales. Contrastando con esta realidad, existe el hecho de que muchos delincuentes de "élite" han logrado evitar su encarcelamiento usando artimañas legales e institucionales.

Ciertamente mucha de la población reclusa —mayoritariamente pobre— ha cometido delitos y ha victimizado a muchas personas. Por tanto, está cumpliendo sus respectivas penas legales; pero eso no justifica ningún castigo infrahumano y mucho menos la tortura. Entonces, ¿era evitable la tragedia? Probablemente sí; y no haberla impedido es atribuible, en par-

te, a la falta de atención de las autoridades de Gobernación así como a factores estructurales y presupuestarios. A continuación señalamos los más destacables.

De entrada, el hacinamiento. El Penal “La Esperanza”, conocido como “Mariona”, fue construido hace treinta y cinco años con una capacidad para albergar a ochocientos reos. Probablemente, en ese entonces respondía a las exigencias de la época. Pero ahora, alberga a más de tres mil reos —casi cuatro veces su capacidad real— lo que genera sobrepoblación y hacinamiento. Esta situación afecta los derechos básicos de los reclusos y, además, limita la posibilidad de brindar el tratamiento penitenciario para su reincorporación a la sociedad; además, es una expresión del “trato cruel inhumano y degradante” que constituye una violación del artículo 9 de la Ley Penitenciaria, la Constitución de la República y diversos tratados internacionales.

Las celdas de aislamiento no reúnen condiciones de espacio físico adecuado para que una persona habite en ellas. No obstante, están ocupadas hasta por seis internos como sucede en el Centro Penitenciario de San Francisco Gotera. Esto produce un hacinamiento que, según Naciones Unidas, consiste en un trato inhumano y degradante. La situación se agravó con el desatinado “Plan Mano dura”, que tuvo como resultado el encarcelamiento, a toda costa, de pandilleros. Igualmente ha cooperado para su empeoramiento, el abuso por parte de los jueces de la medida de encarcelamiento en la tramitación de los procesos criminales.

En segundo lugar, ha sido gravemente descuidada la seguridad de los recintos, sin proteger así el derecho a la vida. Esto es evidente cuando caemos en la cuenta de que las mismas peleas entre pandillas que ocurren en la calle se repiten al interior de los penales. ¿Será que las autoridades, conscientes de este hecho, creen que estas peleas forman parte de la pena y por ello se muestran indiferentes a evitarlas, aun sabiendo que pueden finalizar con una muerte? Otra negligencia ha sido la falta de clasificación de reos, que buscaría separar a las pandillas rivales, reos comunes, condenados y pendientes de condenar. Y los hechos aquí comentados nos muestran la urgencia de esta clasificación, pues seis de las víctimas no

habían sido condenadas.

El tercer factor tiene que ver con las condiciones de “vida” al interior de los centros penales, como la atención de la salud. La PDDH ha constatado que los diecinueve centros penales no cuentan con recursos necesarios para brindar una pronta, adecuada y eficiente atención a los problemas de salud, especialmente tratándose de servicios especializados como el caso de VIH, tuberculosis y problemas de salud mental. La Ley Penitenciaria establece en su artículo noveno, que el interno tiene derecho a que el establecimiento donde esté guardando prisión cuente con las instalaciones sanitarias y médicas mínimas, para garantizar la preservación de su vida, salud e integridad física. Es decir, nos encontramos ante otra violación a la ley por parte de las autoridades.

Otro factor que influye en estos episodios violentos en los centros penales es la escasa actividad con relación a programas, sean estos laborales, culturales, educativos, etc. En especial son escasos los programas especializados según el tipo de delitos cometidos. Muchas veces el derecho al acceso a estos programas está limitado, debido a los insuficientes materiales de trabajo y a espacios físicos adecuados para el desarrollo de las clases. A lo anterior se suman otros factores, como los traslados constantes de los reclusos que obstaculizan estos servicios, y la existencia de prácticas discriminatorias a los miembros de maras, quienes necesitan programas específicos de resocialización. Por otro lado, existe la aplicación de condiciones de aislamiento de reos con finalidades disciplinarias, las que se realizan con arbitrariedad y al margen de los requisitos de la ley.

Por todas estas violaciones a la ley penitenciaria y a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, aunadas a otras necesidades —como la mejora del sistema de control de visitas, y la construcción de otros centros de reclusión—, resulta evidente la responsabilidad del Director de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda, en los hechos acontecidos la semana pasada. Dicho en términos más simples, “incumplió su labor”.

En definitiva, vale la pena retomar las palabras de Romero —la voz de los pobres en este país— cuando señaló que “és preciso defender lo mínimo, que es el máximo don de Dios: la vida.”